**VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 02409/INFOEM/IP/RR/2025, PROMOVIDO EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

En términos de lo dispuesto por los artículos 189, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 14, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; 45, 48, fracción I, de los Lineamientos para el funcionamiento del Pleno y las Comisiones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, emito el presente **Voto Particular** por no compartir en su totalidad las consideraciones que sustentan la Resolución del Recurso de Revisión **02409/INFOEM/IP/RR/2025.**

Como se desprende de la Resolución que nos ocupa, el Particular solicitó, entre otras cosas, el documento de grado de estudios de la Titular de la Unidad de Transparencia y el personal que labora en su área, en respuesta, el Sujeto Obligado entregó diversos documentos y omitió entregar el documento de grado de estudios de la Titular de la Unidad de Transparencia, motivo por el cual, se ordenó la entrega del documento que acredite el grado de estudios de la Jefa de la Unidad de Transparencia.

En ese sentido, es preciso mencionar que, no se comparte el criterio de clasificar como información confidencial la firma que obra en los documentos que dan cuenta de la preparación académica de servidores públicos en virtud de lo siguiente:

El Título profesional o el certificado de estudios corresponden a documentos emitidos por instituciones del Estado, Autónomas, Descentralizadas y Particulares, que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de una persona que haya concluido sus estudios correspondientes o demostrado tener determinados conocimientos, en términos de los artículos 1° y 8° de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México.

Por su parte la cédula profesional, es el documento que toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener **con efectos de patente;** esta es otorgada por la Dirección General de Profesiones, para identidad en todas las actividades profesionales, de conformidad con los artículos 3° y 23, fracción IV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México. Así, los documentos que dan cuenta de la preparación académica sirven como medios de identificación, para que a su titular lo relacionen con el nivel de estudios con que cuenta independientemente de que estos sean o no medios de identificación oficiales.

En este sentido, acceder a la fotocopia del título, cédula profesional o cualquier otro documento que acredite preparación en algún campo del conocimiento, proporciona información valiosa sobre la experiencia académica de quienes ocupan cargos en la administración pública; asimismo, permite conocer con toda certeza y de manera indudable si las personas que se desempeñan como servidores públicos tienen el perfil idóneo para desarrollar las actividades y atribuciones que se deriven de su encargo.

Al respecto, se debe tener presente que la naturaleza de los documentos que acreditan el nivel de escolaridad o grado académico consiste en ser un medio de identificación que acredita a su titular como un profesional o experto en algún área de estudio o conocimiento frente a terceros, por lo que la entrega de estos con la firma justamente tiene el efecto de cumplir este objetivo.

Así, frente a esa situación, la mayoría del Pleno determinó la necesidad de testar la firma en los documentos que se analizan, debido a que, desde su punto de vista no es necesario que el ciudadano acceda a dicho dato personal, ya que actualiza la fracción I, del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Sin embargo, se considera que la publicidad de la firma, en los documentos que acrediten un nivel de estudios o grado académico, debe situarse sobre la publicidad de los documentos solicitados **a partir de su propia naturaleza como documentos de identidad para acreditar frente a terceros que se tiene determinado nivel académico o de conocimientos** y, que estos efectivamente corresponden al servidor público del cual se requiere conocer información, más aún cuando se trata de servidores públicos.

Bajo este orden de ideas, la entrega con el mayor número de datos dentro de los documentos que acreditan el nivel académico o de preparación en algún área del conocimiento, **aporta elementos de convicción sobre su legalidad y legitimidad**, además de que permite verificar que los servidores públicos que ocupan cargos dentro de la administración cuentan con el nivel académico que ostentan y en muchas ocasiones esta información también permite verificar su idoneidad para el cargo.

En ese sentido, queda claro que existe el interés no sólo del Particular, sino de toda una sociedad, de conocer que aquellos que se desempeñan en la administración pública cuentan con una preparación idónea para desempeñar adecuadamente su función; además, que permite validar que los servidores públicos, validaron la obtención de determinado grado académico, o bien, la acreditación de cierto nivel de conocimientos. También es de señalar que la firma es considerada un dato personal, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados.

De tal circunstancia, al tratarse de un dato concerniente a una persona física, suele considerarse confidencial**;** sin embargo, como se plasmó en líneas previas, corresponde al servidor público que obtuvo un grado académico y aceptó contar con cierto nivel de conocimientos.

Suponiendo sin conceder, que se trate de una probable colisión de derechos entre el de acceso a la información del particulary el de protección de datos personales del servidor público, se debe realizar la ponderación de los dos derechos; sobre dicha situación, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido la **necesidad de resolver el conflicto apuntado mediante el ejercicio de ponderación; además, que el interés público que tenga cierta información, será concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad o la vida privada, en donde este derecho debe ceder a favor del derecho a comunicar y recibir información, atentos a las circunstancias de cada caso en concreto,** tal y como se desprende de la tesis 1a. XLIII/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 928, de marzo de 2010, Novena Época, materia constitucional.

En orden de ideas y en atención a la naturaleza del derecho a la protección de datos personales, por analogía, este debe ceder cuando exista un interés público mayor de acuerdo con las circunstancias del caso. Así, consideramos necesario realizar una ponderación de los dos intereses jurídicos tutelados; para lo cual, el artículo 184 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que cuando exista una colisión de derechos, este Instituto, al resolver el Recurso de Revisión, debe aplicar una prueba de interés público con base en los siguientes elementos:

* **Idoneidad:** La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;
* **Necesidad:** La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y
* **Proporcionalidad:** El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

En ese orden de ideas, consideramos necesario analizar cada uno de los elementos referidos, partiendo de que, en el caso concreto, se estima como preferente el derecho de acceso a la información, bajo las consideraciones que se verterán a continuación.

1. **Juicio de idoneidad**

Esta primera fase de la prueba consiste en identificar si la medida restrictiva persigue una finalidad constitucionalmente válida, además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar de manera innecesaria o desproporcionada el derecho fundamental en cuestión.

En ese contexto, se estima que existe un fin constitucionalmente válido para dar a conocer la firma de aquellos trabajadores que obtuvieron un grado académico o acreditaron cierto nivel de estudios; dicho fin es la transparencia y rendición de cuentas de que el personal que labora para el Sujeto Obligado y en determinado cargo, cuenta con los conocimientos necesarios para ejercer las funciones establecidas.

Además, que el derecho de acceso a la información se plantea a través de la solicitud para acceder a los documentos que acreditan el nivel de estudios de los servidores públicos, los cuales se integran por una serie de elementos, cuya concurrencia simultánea aporta mayores elementos de convicción sobre su contenido.

De tal suerte que, la ausencia de elementos de relevancia como la firma dificulta que estos documentos cumplan con el propósito para el cual son expedidos, es decir, la finalidad constitucionalmente válida es que estos elementos sean medios de identificación de su titular como una patente para el ejercicio de alguna profesión, para el caso de las cédulas o que han cursado satisfactoriamente los estudios necesarios para desarrollar alguna carrera técnica u oficio (título, certificado o diploma); además, permite verificar que el servidor público cubra el perfil adecuado o exigido para el cargo, de acuerdo con las disposiciones normativas aprobadas por la institución pública de que se trate.

1. **Juicio de necesidad**

Ahora bien, el juicio de necesidad tiene como objetivo analizar si la medida es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental.

Dicho lo anterior, el contenido en los documentos que acreditan el grado de estudios, en este caso la firma, y de la que no se ordenó poner a disposición, no puede sustituirse por otro, es decir, no existe algún otro elemento que pueda suplir la misma, dada su naturaleza y características, pues como señaló es una representación gráfica de identidad y mediante esta aceptó recibir un grado académico, que hace las veces de patente, para ejercer una profesión, o bien, mediante esta se aceptaron las calificaciones plasmadas o nivel de conocimientos obtenido.

Así, no existe algún distintivo que pueda representar las características inherentes del individuo, como la firma, por lo que, el acceder a esta, resulta ser la medida necesaria, para que el Solicitante cuente con mayores elementos de convicción respecto al contenido de los documentos que el Sujeto Obligado pone a disposición, ya que el que un documento posea la firma de su titular, resulta ser un reconocimiento de su contenido, pues es la manera idónea de darle autenticidad.

Además, que la entrega completa de los documentos de identificación analizados, acredita que los servidores públicos cumplen con el perfil señalado en la ley o el idóneo de acuerdo al propio Sujeto Obligado y su marco normativo, si es que no existe un perfil de puesto aprobado por autoridad competente, con lo que se fortalece la cultura de la rendición de cuentas; restar un elemento como la firma reduce su valor para quien lo consulta y disminuye sensiblemente los elementos de convicción sobre su contenido.

1. **Juicio de estricta proporcionalidad**

En esta fase, se debe establecer que la medida propuesta debe ser estrictamente proporcional y constituir la mínima afectación posible al otro derecho involucrado (derecho a la vida privada), de tal forma que el de protección de datos personales retroceda en la estricta e indispensable proporción para que el de acceso a la información prevalezca, sin que, desde luego, desaparezca el primero, ya que aquellos datos que sí suponen una invasión a la vida privada, como el CURP por ejemplo, o las calificaciones, sí deben ser eliminados de estos.

Al respecto, si bien, el criterio que sostenemos se inclina por la apertura de elementos que atañen a la persona, con la finalidad de entregar al Solicitante mayores elementos de convicción respecto al contenido de documentos que acreditan cierto grado de estudio, también lo es que, concuerdo con que estos se entreguen en **versión pública**, con esto se pretende que la invasión a la intimidad de la persona sea estrictamente proporcional, de tal forma que prevalezca el interés público referido, pero que no se suprima de manera absoluta el derecho a la protección de datos personales de los servidores públicos.

Además, como ya lo hemos señalado, los documentos que dan cuenta del nivel de estudios o preparación de los servidores públicos, tiene la finalidad de contar con los elementos necesarios que permitan a cualquier persona verificar el grado académico con el que se ostentan los servidores públicos y, de ser el caso, que su perfil profesional es acorde con el idóneo o exigido para el desempeño del cargo público, así, ante una solicitud de acceso a la información pública, los documentos que se entreguen deben tener el mayor número de elementos sobre la identidad de su titular y los estudios cursados.

En este sentido, la estricta proporcionalidad en la valoración de los datos que deben entregarse como públicos, deviene de la naturaleza de los mismos, que es la de ser documentos de identificación, respecto de la profesión, carrera técnica o estudios en general que puede desempeñar una persona al haber sido autorizado para ello; en efecto, no se trata de una invasión a la intimidad o la vida personal del titular del dato, ya que **su intensión al tramitarlos y obtenerlos es ponerlos a la vista de cualquier tercero, frente al que quiera acreditar sus conocimientos en un área de estudio**, por lo que se trata de que cualquier persona interesada en conocer el nivel de preparación de un servidor público pueda conocerlo; esto implica que la información se encuentra relacionada directamente con la calidad de servidor público y no con su vida privada.

En sentido contrario, testar la firma va en contra de la naturaleza de los documentos que se analizan que es la de identificar plenamente a su titular, como el profesional capacitado para ejercer la profesión o bien, que cuenta con determinados niveles de conocimiento y, por ende, valorar su idoneidad en la función pública que desempeñe. En conclusión, aquellos datos personales que permiten identificar plenamente a quien los presenta, para acreditar su preparación académica, como firma o incluso la fotografía, no deben ser eliminados de las versiones públicas.

Así, con base en los razonamientos expuestos, se emite el Presente **Voto Particular**. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------